

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310501020190074901		
Proceso:	Ordinario		
Demandante:	ALICIA MARIA HENAO URIBE		
Demandado:	PROTECCION S.A., COLPENSIONES		
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM		
Fecha de fallo:	16/12/202		
Decisión:	CONFIRMA	Y	ADICIONA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 19/12/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE	ALICIA MARIA HENAO URIBE
DEMANDADAS	COLPENSIONES Y PROTECCIÓN S. A
ORIGEN	Juzgado Diez Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05001-31-05-010-2019-00749-01
TEMAS	Ineficacia de traslado de régimen pensional
CONOCIMIENTO	Consulta y apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha señalada, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 13 del Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ALICIA MARIA HENAO URIBE contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, y PROTECCIÓN S.A.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda¹

La señora Alicia María Henao Uribe formula demanda contra Colpensiones y Protección S.A, pretendiendo se decrete: **i)** la ineficacia de su afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad- RAIS- administrado por Protección S.A, por ende, se declare que **ii)** siempre ha estado afiliada al Régimen de Prima Media- RPM, administrado por Colpensiones, y en consecuencia de la anterior declaración, se condené a **iii)** Protección S.A a devolver a Colpensiones el capital ahorrado, incluyendo las cotizaciones, descuentos de seguro previsional, bonos de cualquier tipo, los rendimiento, y los gastos de administración de la Cuenta de Ahorro Individual de la actora, a **iv)** Colpensiones a reactivar a la demandante en RPM y realizar los trámites administrativos para recibir los valores antes enunciados, finalmente, **v)** costas a cargo de las demandadas.

Fundamentó sus pretensiones en que inició sus cotizaciones ante el extinto Institutos de Seguros Sociales- ISS, en el mes febrero de 2006 suscribió formulario de afiliación con destino a Protección S.A, la cual obedeció por una tendencia mercantil por parte de los fondos privados, los asesores le brindaron a la demandante una indebida y

¹ Carpeta 01PrimeralInstancia, 002Demanda.pdf pág. 2/5

pésima asesoría, pues desconocían su futuro pensional en el RPM, ya que en este hubiera podido pensionarse con un IBL más alto y una tasa de reemplazo más atractiva de acuerdo a su IBC, le informaron que se pensionaría antes de cumplir la edad exigida por el ISS, que la mesada pensional sería mayor, que el ISS se iba acabar, y el reconocimiento de la pensión sería más expedito en el RAIS, por cuanto no tendría los problemas que presenta el ISS; lo que demuestra de manera clara y conducente en el engaño y error en que fue inducida la demandante, dado que, que el asesor se limitó a indicarle falsas promesas y omitió informar a la accionante cual sería las condiciones y lo factores que influirían para obtener una pensión en el RAIS.

De acuerdo a lo anterior, la demandante solicitó a Protección S.A cálculo de proyección pensional, la cual se negó aduciendo excusas inconducentes, sin embargo, con fundamento en la historia laboral, a la edad de 57 años, la pensión de la actora en el RPM sería superior a la que obtendría en el RAIS. Finalmente, toda esta situación fáctica es constitutiva de un perjuicio irremediable en caso de verse obligada a recibir la pensión por parte de Protección S.A, ya que sería violatorio al mínimo vital y móvil, teniendo en cuenta el ingreso que recibe actualmente la accionante.

Oposición a las pretensiones de la demanda

Quienes conforman la pasiva, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, así:

i) Colpensiones.²

Por carecer de fundamentación fáctica y legal, toda vez que la afiliación fue valida, pues al suscribir el formulario de vinculación al RAIS la demandante hizo uso de su derecho a la libre elección de régimen consagrado en los artículos 13 de la Ley 100 de 1993, literal b), sin que se hubiera ejercido el derecho al retracto de dicha selección dentro del término previsto para ello en el Decreto 1161 de 1994 y Decreto 1642 de 1995, razón por la cual, no le es dable alegar vicios en el consentimiento para atacar la eficacia de dicho acto. Finalmente, en cuanto la condena en costas, debe ser asumida por la parte vencida en juicio de conformidad con el Código General del Proceso. Excepción: inexistencia de la nulidad o ineficacia del traslado de régimen pensional, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas, compensación.

ii) Protección S. A³

Constituye un acto plenamente valido, existente, exento de vicios en el consentimiento, emanado de la voluntad de la demandante, lo cual se observa en el formulario de vinculación suscrito por la actora de forma libre y espontanea en los términos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994, solemnizándose de esta forma su afiliación, de la cual nacieron obligaciones para ambas partes, y no puede ser desvirtuado por afirmaciones indeterminadas, razón por la cual no puede predicarse vigente y sin solución de continuidad su afiliación al RPM. Además, que la actora se

² Carpeta 01PrimeraInstancia, archivo 007.ContestaciónDeDemanda(2).pdf pág. 2/7

³ Carpeta 01PrimeraInstancia, archivo 016.CONTESTACIÓN ALICIA MARIA HENAO URIBE.pdf. pág. 4/5 y 15/21

encuentra inmersa en la prohibición legal que consagra la Ley 797 de 2003 por estar a menos de 10 años de cumplir la edad límite de pensión por lo que no puede regresar a dicho régimen.

Ahora bien, se brindó a la demandante información oportuna, amplia, veraz y clara frente a las características del régimen pensional aclarando todas las dudas e inquietudes que la accionante pudo tener al respecto, es por ello que el consentimiento brindado en el formulario de afiliación inicial obedeció a un consentimiento informado, conociendo todas y cada una de las implicaciones que dicha afiliación conllevaba, y no puede predicarse que la parte actora fue engañada por resultar en la actualidad que el valor de su mesada pensional en el RAIS es inferior a la mesada pensional que obtendría en el RPM, pues para el momento de su traslado de régimen no era posible fácticamente predecirlo porque le faltaban muchos años de cotización y edad para alcanzar una pensión de vejez, además que el monto de la pensión está ligado a situaciones financieras, económicas y cambios normativos.

Respecto a los valores que se solicitó sean trasladados a Colpensiones, se encuentran acreditados en la cuenta de ahorro individual a nombre de demandante y harán parte del capital para financiar la prestación económica que se genere en el RAIS, dichos descuentos se realizaron por disposición legal vigente, la comisión de administración ya fue causada y pagada, por lo que no puede trasladarse dinero diferente al que se encuentra en la Cuenta de Ahorro Individual y sus rendimientos. Por último, no procede la condena en costas, por no predicarse conducta alguna en contra de Protección S.A, por el contrario, se solicitó se condene en costas a la parte actora por no tener asidero sus pretensiones. Excepcionó: Inexistencia de la Obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declarara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, Innominada o Genérica.

Sentencia de primera instancia⁴

El 09 de mayo de 2022, el Juzgado Diez Laboral del Circuito de Medellín Declaró ineficaz cambio de régimen efectuado por la demandante el 22 de diciembre de 2005, y en consecuencia, ha permanecido afiliada al Régimen de Prima Media- RPM administrado por Colpensiones, Condenó a Protección S.A a trasladar a Colpensiones dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la ejecutoria de esta providencia, el saldo existente en la Cuenta de Ahorro Individual de la demandante junto con sus rendimientos, bonos pensionales si lo hubieren, el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, gastos de administración, valor de las primas de seguros previsionales y reaseguros, debidamente indexados a la fecha del traslado; Ordenó que al momento de cumplirse la orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen. Ordenó a Colpensiones a recibir de Protección S. A. los valores aludidos, e incorporarlos como

⁴ Carpeta 01PrimeraInstancia, archivos 021 2019-749 ACTA AUDIENCIA ARTS 77 y 80 (1).

aportes pensionales en la historia laboral, imputándolos a los periodos que fueron cotizados y de acuerdo al IBC, lo que habrá de tenerse como semanas cotizadas para el futuro reconocimiento de la prestación de vejez. Costas a la AFP Protección S.A., y le fijó la suma de \$1,000,000 como agencias en derecho.

Para fundamentar lo decidido, el juez de primera instancia acudió al precedente judicial y la normatividad vigente en la materia y señaló que, el traslado de régimen pensional debe estar precedido de una decisión libre, es decir, que el actor haya sido debidamente informado por parte de las AFP del RAIS quienes tienen la obligación de asesorar de manera suficiente y razonable sobre la conveniencia de uno u otro régimen, dado que, no constituye prueba suficiente para validar el deber de información el formulario de afiliación, pues en este no hay un estudio particular de las condiciones del afiliado, siendo solamente una formalidad legal, no obstante Protección S.A no satisfizo la carga probatoria ni con el interrogatorio de parte, ni con los documentos aportados al proceso, declarando en consecuencia la ineficacia de traslado de régimen pensional. Por último, la ineficacia del régimen pensional es imprescriptible, porque se pretende la declaratoria de un estado de cosas que siempre ha existido y el derecho pensional está en formación.

Recurso de apelación

Apoderado de Protección S.A: Presentó recurso de apelación solicitando que se declare la ineficacia de lo actuado a partir del artículo 80 en la presente diligencia y frente a la orden de trasladar los gastos de administración y del seguro previsional a COLPENSIONES en caso de no prosperar la solicitud de nulidad: **i) Frente a la solicitud de declarar la nulidad procesal de lo actuado a partir del artículo 80** argumenta que al permitir que cuatro DEMANDANTES intervengan de manera conjunta en el interrogatorio, se presenta una vulneración al derecho de defensa, los principios de independencia e imparcialidad frente a la prueba decretada y realizada por esta entidad. El Juez debe ser garante del derecho de defensa no solo de la parte demandante sino también de los fondos privados de manera imparcial, por lo cual, durante la audiencia del artículo 70 se le solicitó al juez reponer la decisión, pero el juez consideró no procedente ningún recurso ya que los supuestos fácticos de cada caso son diferentes, argumento que no comparte el apoderado, pues interrogatorio realizado de esta manera virtual limita obtener la veracidad de los hechos y al realizar el interrogatorio de manera colectiva, permite a cada accionante escuchar lo de los demás y aplicarlo en su caso concreto. **ii) Frente a la orden de trasladar los gastos de administración y del seguro previsional a COLPENSIONES en caso de no prosperar la solicitud de nulidad sostiene que:** **a) PROTECCIÓN S.A.** ha actuado de buena fe y los recursos por conceptos de gastos de administración y del seguro previsional, descontados de la cuenta de ahorro individual del accionante que se debate el día de hoy, se realizaron por el imperio de la ley contenidas en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993. **b)** En el caso menos favorecido se observan unos rendimientos del 95% respecto a los aportes depositados en esa cuenta de ahorro individual y en el caso más favorecido unos rendimientos hasta del 500% respecto a los rendimientos realizados en esa cuenta, por lo se considera justo que se le permita a PROTECCIÓN S.A. conservar los gastos de administración y del seguro previsional

específicamente ya descontados de buena fe y encausados por un tercero como es la aseguradora.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

Otorgado el término para alegar de conclusión en esta sede, solo Colpensiones lo recorrió oportunamente, mientras que el demandante y Protección S.A se abstuvieron de pronunciarse.

Colpensiones⁵ no son de recibo las consideraciones del juez de primea instancia, por cuanto la demandante al momento de presentar la demanda contaba con 50 años de edad, por lo cual se encuentra inmersa en la prohibición legal de trasladarse artículo 2 de la Ley 797 de 2003, adicionalmente, la demandante no demostró dentro del proceso que ejerció de manera oportuna las acciones jurídicas tendientes a regresar al RPM, como es el derecho de retracto y el año de gracia. Por otro lado, la afiliada también debe cumplir prácticas y deberes consagrados en el Decreto 2241 de 2010, como es informase de las características del régimen pensional e indagar sobre las condiciones exigiendo explicaciones necesarias para la toma de decisión de afiliarse, no obstante, la demandante no cumplió con la carga probatoria que impone los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso.

Por último, en caso de que se confirme la sentencia solicitó se ordene al fondo privado trasladar debidamente actualizado el saldo de la cuenta de ahorro Individual, rendimientos, cuotas de administración, seguro previsional, fondo de garantía de pensión mínima de conformidad con la sentencia SL- 81989 de 2008.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, respecto de los puntos objeto de apelación. Igualmente se surte el grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, conforme al artículo 69 del CPTSS modificado por la Ley 1149 de 2007, y en acatamiento de la decisión de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia de radicado 7382 de 2015.

Examinados los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por la demandada Protección S.A, y los argumentos de la decisión de primera instancia, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe: **1)** En primer lugar, en analizar los argumentos del recurso de apelación de PROTECCION S.A en relación con la existencia de una nulidad durante el trámite de la audiencia pública. Si no se encuentra probada la vulneración al debido proceso alegada, se pasará a analizar: **a)** la viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS, de ser procedente dicha declaratoria, se precisarán, **b)** las consecuencias de dicha declaración, como el que su afiliación al

⁵02SegundaInstancia, archivo 03AlegatosColpensiones1020190749.pdf

RPM se considere sin solución de continuidad, así como lo concerniente a los conceptos que deben trasladarse desde la AFP del RAIS hacia Colpensiones.

1. No se acredita la vulneración al debido proceso de protección s.a en el trámite de la audiencia pública del artículo 80 del cptss.

El apoderado de **PROTECCIÓN** afirma la existencia de una nulidad durante la audiencia realizada el pasado **09 de mayo de 2022**, porque al realizarse de manera virtual y acumulando cuatros procesos, cada demandante estuvo presente durante la diligencia de interrogatorio de parte de los demás.

A juicio de esta corporación no procede tal solicitud, porque analizando de fondo el asunto y bajo el presupuesto de que en la acumulación de los procesos y concentración de las audiencias se concedió la oportunidad para interrogar a los demandantes conforme a la prueba decretada en favor de la parte litigiosa por pasiva, y escuchado el interrogatorio de la señora **HENAO URIBE**, se observa que éste se desarrolló dentro de los cánones legales y no se avizora irregularidad capaz de causar desmedro a los derechos y garantías procesales que le asisten a la accionada.

Así, la Sala no encuentra que con la actuación se configure ninguna de las causales contempladas en el artículo 133 del Código General del Proceso aplicable por analogía al procedimiento laboral, ni se evidencia vulneración al derecho de contradicción y defensa de PROTECCIÓN S.A, al tenor de lo dispuesto en el artículo 40 del CPTSS que consagra el principio de libertad de la actuación procesal de manera adecuada al logro de su finalidad.

De acuerdo con lo anterior, se pasa a estudiar los siguientes puntos objeto del problema jurídico:

Hechos relevantes probados documentalmente

Alicia María Henao Uribe nació el 11 de febrero de 1969⁶. Inicio sus labores el 1 de mayo de 2000⁷. El 22 de diciembre de 2005⁸ suscribió traslado con destino a Protección S.A., el cual se hizo efectivo el 01 de febrero de 2006⁹. Según historia laboral emitida por Protección S.A actualizada al día 15 de marzo de 2020¹⁰ la actora cuenta con 938,86 semanas cotizadas durante toda su vida laboral, de las cuales 23,71 lo fueron ante el RPMD y 915,15 fueron ante el RAIS.

Obra en el expediente documento titulado reasesoría pensional del 26 de febrero de 2015¹¹. El 15 de octubre de 2019¹², solicitó ante Protección S.A la ineficacia del traslado al RAIS, que las cosas vuelvan a su estado anterior, el traslado de todos los

⁶ 01PrimeralInstancia; archivo 002Demanda.pdf. pág. 12 “Copia de cedula de ciudadanía”

⁷ 01PrimeralInstancia; archivo 002Demanda.pdf. pág. 38 “Historia laboral no válida para bono”

⁸ 01PrimeralInstancia; archivo 002Demanda.pdf. pág. 21

⁹ 01PrimeralInstancia; archivos 016 CONTESTACIÓN ALICIA MARIA HENAO URIBE.pdf. pág.45 “Asofondos”

¹⁰ 01PrimeralInstancia; archivo 016 CONTESTACIÓN ALICIA MARIA HENAO URIBE.pdf. pág. 61

¹¹01PrimeralInstancia; archivo 002Demanda.pdf. pág. 24

¹²01PrimeralInstancia; archivo 002Demanda.pdf. pág. 13/16

conceptos de la Cuenta de Ahorro Individual, proyección pensional y toda la información que repose en los archivos, el 28 de octubre de 2019¹³ Protección S.A respondió que la afiliación se presume legal, y la AFP no tiene competencia para anular la vinculación, ya que, debe ser por medio de la autoridad judicial, adicionalmente, no se puede trasladar porque se encuentra en la prohibición legal por faltarle menos de 10 años para pensionarse, y finalmente, no es posible realizar proyección pensional porque en la base de datos registra como historia laboral no válida para bono pensional, por lo cual no son valores reales.

Así mismo, el 15 de octubre de 2019¹⁴. solicitó ante Colpensiones la nulidad o ineficacia del traslado, que las cosas vuelvan a su estado anterior, el traslado por parte de Protección S.A de todos los conceptos de la Cuenta de Ahorro Individual, Colpensiones recibir todos estos valores y computar las semanas cotizadas en la historia laboral y el pago de cualquier perjuicio, al día siguiente¹⁵, Colpensiones respondió que no es posible, pues la afiliación fue realizada por la demandante ejerciendo el derecho de libre elección de régimen, y actualmente se encuentra en la prohibición legal del artículo 2 de la ley 797 de 2003.

a) Viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS.

Con la finalidad de determinar la eficacia o ineficacia de la afiliación al RAIS por parte de la demandante, es menester acudir a los siguientes preceptos normativos que regulan la materia:

- i) Los artículos 48, 53, 335¹⁶ y demás normas concordantes de la Constitución Política;
- ii) La Ley 100 de 1993 en sus artículos 1¹⁷, 3, 4, 10, 12, 13 literal b, Inciso 3º del Literal c) del artículo 60, 90, 97, 271; iii) Artículo 4 y demás normas concordantes del Decreto 656 de 1994¹⁸; iv) Decreto 692 de 1994; v) El Decreto 663 de 1993, cuyo artículo 72 en su literal f) adicionado por el art. 12 de la Ley 795 de 2003, contiene prohibiciones expresas¹⁹ para las entidades del sector financiero entre ellas las AFP; y vi) los arts. 4, 10, 12 y demás concordantes del Decreto 720 de 1994²⁰.

¹³01PrimeraInstancia; archivo 016 CONTESTACIÓN ALICIA MARIA HENAO URIBE.pdf. pág. 76/79

¹⁴01PrimeraInstancia; archivo 002Demanda.pdf. pág. 40/41

¹⁵01PrimeraInstancia; archivo 002Demanda.pdf. pág. 42/44

¹⁶ Las actividades que desarrollan las AFP al tenor del **artículo 335 de la CN.**, son de interés público y su ejercicio está reglamentado por la ley, en razón de la función que desempeñan.

¹⁷ Consagró el artículo primero de esa ley 100, como objeto del aludido sistema: *garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad “para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afectan.”*

¹⁸ Conforme al **artículo 4** y demás normas concordantes del **Decreto 656 de 1994**, las administradoras se sitúan en el ámbito de la **responsabilidad profesional**, que **las obliga a prestar de manera eficiente, eficaz y oportuna los servicios** inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, considerados idóneos por sus conocimientos técnicos especializados y experiencia en compleja materia financiera, para garantizar derechos de sus asegurados; tal responsabilidad se mide con mayor rigor que el utilizado frente a las obligaciones entre particulares, en razón a la delegación del servicio público de seguridad social en pensiones que asumen en el RAIS, sostiene la SCL de la H. Corte Suprema

¹⁹ **Se les prohíbe: “No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la Superintendencia Bancaria deba entregarse al público, a los usuarios o a los clientes de las entidades**

Adicionalmente es pertinente hacer un breve recuento de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, que estructura el tema, y está contenida en las sentencias 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519 de 2015; 47125, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019; STL 3716, STL4001, STL4084, SL2877, SL4811 de 2020, y SL1217, SL782 de 2021, basada en la necesidad de determinar si en cada asunto concreto, la AFP receptora de la afiliación satisfizo tanto para ese momento, como durante la vigencia de la relación con quien demanda la ineficacia, la obligación consagrada en el numeral 1.º del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, aplicable a las AFP desde su creación, de “*suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen*”. No pudiéndose predicar como sostiene la pasiva, ni la Superintendencia Financiera que, la existencia del deber de asesoría, solo se originó desde la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

Advierte esa alta Corporación de Justicia sobre la necesidad de que la decisión del traslado de Régimen esté precedida de toda información relevante que el Fondo de pensiones proporcione a quien pretenda afiliarse, la cual, debe ser suficiente, completa y clara sobre las implicaciones que le conllevaría dejar el anterior Régimen y sus posibles consecuencias futuras. Pues, conforme al Estatuto Financiero de la época en los Artículos 97 y siguientes, consagró que las administradas debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios que orientan la buena fe en las que se sancionaba la falta de información relevante.

Más adelante la Corte Suprema de Justicia precisó que son deberes de las administradoras de pensiones, los siguientes:

- (i) Brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, desde la antesala hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.
- (ii) La información debe ser completa y comprensible. y,
- (iii) La información debe proporcionarse con prudencia, teniendo obligación de buen consejo, que puede llevar incluso a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

vigiladas para que éstos puedan tomar decisiones debidamente informadas y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas”.

²⁰ Norma reglamentaria de los arts. 105 y parcialmente del 287 de la ley 100 de 1993 en cuanto al régimen de promoción y de responsabilidad de las sociedades AFP. disponiendo en el inciso final del artículo 4: QUE LAS ACTUACIONES DE LOS VENDEDORES EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD OBLIGAN A LAS AFP, respecto de la cual se hubiere promovido la respectiva vinculación, es decir, comprometen la responsabilidad de éstas como establece su art. 10 y precisa en el art. 12 que tales promotores deben suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante la vinculación, y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.

Si bien los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esa circunstancia, por ser determinante en ello, la falta de información a la afiliada.

Múltiples Salas de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín han considerado que, si bien los casos concretos abordados por la H. Corte Suprema de Justicia, refieren a personas que fueron beneficiarias del régimen de transición pensional consagrado en el art. 36 de la Ley 100/93, su *ratio decidendi* aplica para quienes se afilian al Sistema Pensional por primera vez o se trasladan entre regímenes en el marco del mismo, enfatizando en la necesidad de demostrar en cada proceso si la AFP suministró, a quien una vez fuera su potencial afiliada, *información clara, completa, suficiente*, en términos de transparencia y eficiencia, a fin de poder concluirse que la decisión adoptada entonces, obedeció a un conocimiento diáfano y preciso, no sólo de lo que se hacía, sino de las consecuencias que se derivarían de la suscripción del formulario de afiliación correspondiente y que por tanto, ese acto jurídico surgió de una real manifestación de voluntad, libre, espontánea y sin presiones.

Lo anterior, tal y como reitera la CSJ en sentencias SL 1688-2019 y 373 de 2020, que radica en la AFP el deber de brindar una información oportuna y adecuada, ello, indiferentemente de si se tiene o no beneficio transicional o si se está próximo a adquirir requisitos para pensionarse, “dado que la omisión al deber de información se predica frente a la validez o no del acto jurídico de traslado.”

Por estas razones, lo argumentado por la pasiva en torno a que la suscripción del formulario acredita la libre e informada manifestación de voluntad del afiliado al momento del traslado no constituye razón atendible para exonerar del cumplimiento de sus obligaciones a la Administradora, menos aún, por cuanto, en los asuntos como el presente, no se discute la capacidad jurídica de los celebrantes, ni la licitud del traslado; se atiende es al hecho de haberse dado el traslado de régimen pensional sin que estuviese precedido de la satisfacción o del cumplimiento del deber de información por parte de la administradora que captó al afiliado, quien, según sus dichos al absolver el interrogatorio de parte, indicó que, el motivo porque el que se trasladó al RAIS, fue porque el asesor le informó que el RAIS estaba avalado por los grupos económicos y era más sólido en comparación al ISS, pues este último se iba a quebrar.

Con independencia de que la afiliación se diera con antelación o en momento posterior a la regulación de deberes del consumidor financiero, las AFP deben, en un acto responsable y comprometido con su función social, dar a conocer a los potenciales afiliados, todas las implicaciones del traslado, como sostuvo la referida Corte en **sentencia SL 4360 de 2019** Radicado 68852.

Sobre la carga dinámica de la prueba ha de indicarse que ésta se radica en cabeza de las AFP que a través de sus agentes propiciaron el traslado de régimen del asegurado, tal y como se aprecia en la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que

suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada *-la de que no recibió información-* y es la AFP a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, al hallarse en mejor posición de ilustrarlo, por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado, además, de estar facultado el fallador por el **artículo 167 del Código General del Proceso**, para distribuir la carga de la prueba a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar todo los elementos de convicción tendientes a esclarecer el objeto del litigio y en asuntos como el que hoy nos ocupa, sin duda quien debe cumplir dicha carga es la AFP del RAIS, por cuanto: **i) Maneja la carpeta con la historia de cada afiliado, así como la información que le fue brindada al momento del trascendental acto del traslado o afiliación, y la que se le haya entregado a lo largo de su permanencia en el fondo**, dirigida a orientarlo sobre las mejores opciones para que tome las decisiones que más le convengan; **ii) Conoce y posee los datos de ubicación y preparación que recibió el asesor** que tuvo a cargo la asesoría efectuada al afiliado y posibilitó que esta firmara el acto jurídico de vinculación o de traslado al fondo de pensiones.

En el sub-lite, mediante la prueba documental se evidencia que Alicia María Henao Uribe nació el 11 de febrero de 1969²¹, por lo que, al 1 de abril de 1994, cuando entró en vigencia el SGSSP para ella, por ser trabajadora dependiente del sector privado, contaba con 25 años y no tenía 15 o más años de servicios y/o cotizaciones, por tanto, no fue beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Según la documental allegada, inicio sus labores el 1 de mayo de 2000²². El 22 de diciembre de 2005²³ suscribió traslado con destino a Protección S.A. Según historia laboral emitida por Protección S.A actualizada al día 15 de marzo de 2020²⁴ la actora cuenta con 938,86 semanas cotizadas durante toda su vida laboral, de las cuales 23,71 lo fueron ante el RPMD y 915,15 fueron ante el RAIS.

Obra en el expediente lo que la demandada denomina reasesoría pensional del 26 de febrero de 2015²⁵, la cual no tiene la entidad para subsanar la omisión de asesoría que previamente al traslado al RAIS debía brindar la AFP a su posible afiliada. El 15 de octubre de 2019²⁶, solicitó ante Protección S.A la ineficacia del traslado al RAIS y proyección pensional y toda la información que repose en los archivos, el 28 de octubre de 2019²⁷ Protección S.A respondió que la afiliación se presume legal, no tiene competencia para anular la vinculación, ya que, debe ser por medio de la autoridad judicial, adicionalmente, y no se puede trasladar porque se encuentra en la prohibición legal por faltarle menos de 10 años para pensionarse, y finalmente, no es posible realizar proyección pensional porque en la base de datos registra como historia laboral no válida para bono pensional, por lo cual no son valores reales.

²¹ 01PrimeraInstancia; archivo 002Demanda.pdf. pág. 12 "Copia de cedula de ciudadanía"

²² 01PrimeraInstancia; archivo 002Demanda.pdf. pág. 38 "Historia laboral no válida para bono"

²³ 01PrimeraInstancia; archivo 002Demanda.pdf. pág. 21

²⁴ 01PrimeraInstancia; archivo 016 CONTESTACIÓN ALICIA MARIA HENAO URIBE.pdf. pág. 61

²⁵ 01PrimeraInstancia; archivo 002Demanda.pdf. pág. 24

²⁶ 01PrimeraInstancia; archivo 002Demanda.pdf. pág. 13/16

²⁷ 01PrimeraInstancia; archivo 016 CONTESTACIÓN ALICIA MARIA HENAO URIBE.pdf. pág. 76/79

Así mismo, el 15 de octubre de 2019²⁸, solicitó ante Colpensiones la nulidad o ineficacia del traslado, que las cosas vuelvan a su estado anterior, recibir todos valores trasladados por Protección S.A y computar las semanas cotizadas en la historia laboral, y el pago de cualquier perjuicio, al día siguiente²⁹, Colpensiones respondió que no es posible, pues la afiliación fue realizada por la demandante ejerciendo el derecho de libre elección de régimen, y actualmente se encuentra en la prohibición legal del artículo 2 de la ley 797 de 2003.

En el sub judice, fue recaudado interrogatorio a la demandante, sin que se produjera confesión de su parte, sostuvo que su vinculación a Protección S.A correspondió a que en el sitio donde laboraba los visitó un asesor de Protección S.A, que le garantizó la continuidad de los fondos de pensiones por ser avalados por los grupos económicos en comparación con el alto riesgo y la quiebra que en ese momento presentaba el ISS, le ofreció una pensión anticipada y que esta podía ser mejor, por lo cual, por el temor de la subsistencia del ISS tomó la decisión de trasladarse al RAIS, además que, confió en la información que le dio el asesor, aunque no le realizó proyección pensional, solo le hizo una asesoría general. Admitió que no se acercó al ISS a verificar la información, porque no había un despacho para hacer ese tipo de indagaciones, escuchaba por medio de noticias, comunicados de prensa y el gobierno nacional las dificultades económicas del ISS, admitió que no fue obligada a firmar el formulario de afiliación, pero si recibió una información parcial, manifestó que varios de sus compañeros se trasladaron al RAIS bajo las mismas premisas, y se encuentran surtiendo un proceso igual, no recuerda si tuvo la oportunidad de hacer preguntas o de trasladarse al RPM, señaló los requisitos para pensionarse en el RPM y que en el régimen público su pensión sería super, finalmente, su motivo para trasladarse al RPM es porque no le dieron la información completa y detallada.

Protección S.A. no aportó elemento de convicción sobre la asesoría que dice haber brindado a la señora Henao Uribe, en momento anterior y/o a la suscripción del formulario de afiliación; siendo esta AFP quien se encargó de tramitar el traslado de régimen pensional, es la llamada a demostrar que ese traslado de régimen no se vio afectado en su eficacia al suministrar la información suficiente, clara, completa a la entonces, potencial afiliada.

En este caso, la pasiva no acreditó la satisfacción de su ineludible deber legal de brindar a la hoy demandante una oportuna información adecuada, suficiente, cierta y comprensible, en términos de transparencia y eficiencia respecto de la vinculación en los dos regímenes pensionales; ni sobre los beneficios e inconvenientes que le generaría el suscribirse a un régimen o a otro, y en general, las consecuencias del tal afiliación, entre ellas, las modalidades de la pensión, el capital necesario para acceder a la pensión de vejez de manera ordinaria, o anticipada, los componentes y variables para establecer el monto de la prestación económica en el RAIS y su comparativo en el RPM, los requisitos para heredar el capital de la cuenta de ahorro individual en caso de fallecimiento, el derecho de retracto, las implicaciones de la negociación anticipada del bono pensional, la posibilidad e incluso la necesidad de hacer cotizaciones

²⁸01PrimeraInstancia; archivo 002Demanda.pdf. pág. 40/41

²⁹01PrimeraInstancia; archivo 002Demanda.pdf. pág. 42/44

adicionales, para obtener la prestación de vejez en el RAIS, entre otros aspectos relevantes, para generar en el posible afiliado, verdadero consentimiento plenamente informado y por tanto, libre y voluntario en la selección o traslado de régimen de pensiones, y ese deber de información es exigible en cada etapa de la afiliación y ejecución del acto jurídico, como bien ha aclarado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

De ello no hay elementos de convicción en el plenario distintos del formulario de afiliación, sobre el cual la AFP Protección S.A. adujo que, estando suscrito por la demandante, quien lo hizo de manera libre y voluntaria, no es dable restarle valor y menos desconocer este acto; sin embargo, en este sentido, las sub reglas establecidas por la Alta Corporación definen que al momento de analizar si resulta procedente declarar la ineficacia de la afiliación: **a)** no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; **b)** en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones **allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados**, en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional. conforme al **artículo 1604 del Código Civil**, la prueba de la diligencia y cuidado recae en quien debió emplearlo y, ello no se satisface solo con allegar documentos previamente elaborados en los que se limita a llenar espacios en blanco, que suscriben las partes, sino con la evidencia real de que la información plasmada atienda las pautas para que se adopte una decisión completamente libre, y que la asesoría brindada fue suficiente para la persona. Lo cual, es acorde con lo normado en **los artículos 97 y 98 del Estatuto Financiero vigente en 1994**, referidos a la debida diligencia que debían emplear las AFP, según los cuales, no se trata sólo de completar un formato, ni adherir a una cláusula genérica, sino de haber transmitido elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, sea que estuviere o no la persona en transición.

Los considerandos de esta providencia también sustentan que los actos de la demandante posteriores al traslado, como su prolongado silencio, o el sufragar aportes, o recibir una reasesoría pensional, fueron indicadores de su intención de pertenecer al Régimen de Ahorro Individual, debiendo recordarse el reiterado precedente de la Sala de Casación Laboral, según el cual, el debate probatorio en los asuntos de ineficacia de traslado se encamina a establecer si, con anterioridad y al momento del acto de traslado, se cumplió el tantas veces nombrado deber de información, **sin considerar los actos posteriores que el afiliado pudiese realizar, pues** la jurisprudencia del órgano de cierre en materia de seguridad social ha dilucidado de manera uniforme que, si la debida asesoría no se brinda con anterioridad y/o al momento de la materialización del traslado, al no cumplir su propósito de generar consentimiento informado para el acto de traslado, se equipara a la ausencia de información (**SL1688-2019, SL2877-2020, SL2937-2021, SL3349-2021**), y adicionalmente, esa falta de información en esta materia, no se convalida por los traslados de administradoras dentro del Régimen de Ahorro Individual (SL3199-2021).

De ahí que, no procede adoptar el criterio aislado contenido en la providencia **SL2440-2021**³⁰, donde una de las Salas de Descongestión de la CSJ., expuso la tesis de los llamados “actos de relacionamiento,” que valga anotar, había formulado la Sala de Casación Laboral permanente en la SL413-2018, en un proceso donde se debatía el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, y fue necesario analizar la voluntad de permanencia del afiliado en un específico régimen pensional, por cuanto no resultaba diáfano a cuál de los regímenes pertenecía, litigio notoriamente ajeno a los asuntos de ineficacia de traslado de régimen pensional.

Conforme al precedente en cita, acogido por esta Sala, el incumplimiento de las mencionadas obligaciones de información por parte de Protección S.A., vulneradora de la libre y voluntaria selección de régimen prevista en el literal b del Artículo 13 de la ley 100 de 1993³¹ genera consecuentemente la INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN AL RAIS, como repuesta jurídica a la transgresión de ese deber legal y ello implica que, el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto no produzca ningún efecto, lo cual fue precisado en **sentencia SL4360 de 2019**, concluyendo en que: “la sanción impuesta en el artículo 271³² de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en sentido estricto, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado”, lo cual, da lugar a garantizar el derecho de la accionante a retornar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por COLPENSIONES se asumirá que así lo ha estado desde el 22 de diciembre de 2005 y a declarar que ha permanecido afiliada, sin solución de continuidad, lo que conlleva a la reactivación de su respectiva afiliación en este último régimen.

Tales motivaciones permiten **confirmar** en ese aspecto la sentencia conocida en apelación.

b) Consecuencias de la declaratoria de ineficacia

Atendiendo al principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, con el fin de que COLPENSIONES cuente con los recursos necesarios, y fundamentalmente se garantice la no afectación financiera del régimen de prima media, y pueda satisfacer las prestaciones que se generen a su cargo, producto de la declaratoria de ineficacia, todos los recursos recibidos con motivo de la afiliación al régimen de Ahorro Individual, deben trasladarse

³⁰ por la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral

³¹ **13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.** El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:

b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley.

³² El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud^{<1>} en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para el control del pago de cotizaciones de los trabajadores migrantes o estacionales, con contrato a término fijo o con contrato por prestación de servicios.

a la administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de las eventuales pensiones, por cuanto, tales sumas repercutirán en la conformación del derecho pensional, dado que el RPM es un fondo común al cual ingresan de forma indistinta los recursos de todos los afiliados y que a través del sistema de reparto intergeneracional se cubren las prestaciones causadas. Además de ser menester que, por efecto de la declaratoria de la ineficacia en asuntos como el abordado en este proceso, la parte beneficiada económicamente con el acto ineficaz por omisión del deber de información garantice que el patrimonio de la persona inducida a la afiliación no sufra deterioro, y pueda disfrutar de las prestaciones del RPM, como si hubiera permanecido en él, como ha dilucidado el precedente jurisprudencial de la H CSJ en SCL., que esta Sala acoge

Bajo las referidas premisas, se **confirmarán y adicionarán** las órdenes impartidas a **Protección S.A.** desde la primera instancia, en el sentido que esta AFP del RAIS, dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia, no solo debe trasladar a COLPENSIONES **la totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros que se han generado durante todo el tiempo en que la hoy demandante figuró como afiliada al RAIS.

Protección S.A., también deberá trasladar a la referida AFP del RPM, las cuotas de administración, el dinero con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y las sumas adicionales de las aseguradoras, por ella descontadas durante el periodo de afiliación de la hoy demandante, pues no se discute la legalidad de tales descuentos, ni, si el dinero de la afiliada fue administrado adecuada y eficientemente, sino que, como consecuencia de la ineficacia del traslado al RAIS, y por no haberse estudiado previamente la afiliación de la situación particular de la hoy demandante, e ignorándose verdaderamente cuáles fueron los argumentos esgrimidos por dicha AFP para aseverar que cumplió con los deberes de información que sostiene haberle dado, no es pertinente exonerarla de la devolución de tales conceptos, independientemente de que Colpensiones no haya administrado el dinero de la afiliada, ni asumido los riesgos que esa actividad conlleva, no pudiendo discutir inexistencia de motivos para entregarlos, detrimento patrimonial, ni enriquecimiento sin causa para Colpensiones y la demandante, tampoco transgrede derechos de las demandadas, por evidenciarse la omisión de asesoría completa y previa a la migración de la accionante hacia el RAIS, pues si bien existió una administración por parte de la AFP del RAIS, además del pago de seguros, consecuencialmente a la declaratoria de ineficacia, todos los recursos deben trasladarse a Colpensiones, administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de la pensión que se genere en favor de la actora, como anteriormente se explicó.

Se rememora que, para efecto de la devolución de conceptos hacia el RPM, con anterioridad, esta Sala de Decisión disponía que, el monto trasladado no fuese inferior al valor total del aporte legal correspondiente en caso de que la afiliada hubiere permanecido en el régimen de prima media y si así fuere, la AFP asumiera el pago de la diferencia, aplicando el precedente de la Corte Constitucional plasmado en las sentencias **C 1024 de 2004**, y en las **SU 062 de 2010** y **SU 130 de 2013** sobre los casos de las personas que regresan del RAIS al RPM, **y de otro lado**, y se abstenía

de ordenar que las AFP del RAIS remitieran con destino a Colpensiones, los valores correspondientes a las sumas adicionales de las aseguradoras, tema que forma parte del recurso de apelación, ante las órdenes impartidas en la primera instancia que aquí se confirma.

Pero, retomando el punto, y por las mismas razones expuestas en este acápite, considerando el precedente de la Sala de Casación Laboral³³ contenido en sentencias **SL 3202-2021, SL 2769-2021, SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021 y SL 3709-2021**, esta Sala ha precisado que las cuotas de administración y los descuentos del seguro previsional, descontadas por la AFP del RAIS durante el periodo de afiliación de la hoy demandante, **se deben trasladar debidamente indexadas y con cargo a sus propios recursos**, con el fin de que se satisfagan en su valor actualizado, dado que la pérdida de poder adquisitivo de la moneda colombiana constituye un hecho notorio.

Al momento de cumplirse esta sentencia, los conceptos deberán aparecer detallados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

En consecuencia, las órdenes impartidas a **Protección S.A.**, desde la primera instancia, se **CONFIRMARÁN y ADICIONARÁN**, como se dijo, y se reitera, deberán cumplirse dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia.

El cumplimiento de tales órdenes será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con PROTECCIÓN S.A. sin trasladar consecuencias negativas a la actora.

Se ordenará a COLPENSIONES recibir de PROTECCIÓN S.A. los recursos correspondientes a los conceptos aludidos, y se homologarán en el régimen de prima media las semanas cotizadas por la actora durante su afiliación en el RAIS.

Así las cosas, se **confirmará y adicionará** la sentencia conocida en apelación.

III. EXCEPCIONES

Se estudian, además, las excepciones formuladas por la pasiva, las cuales quedan implícitamente resueltas, por haberse causado lo pretendido en la demanda.

³³ Esta Sala atiende el precedente judicial original de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir la sentencia con radicado 31989 de 2008 y dando aplicación al artículo 1746 del Código Civil³³, en los cuales fundamentan la *ratio decidendi* de estos procesos, donde esa Alta Corporación determinó que por efecto de la entonces denominada nulidad, hoy ineficacia, generada con ocasión del actuar negligente de las AFP del RAIS, en materia de información, éstas se encuentran obligadas a remitir a Colpensiones no sólo las cotizaciones, rendimientos, si los hubiere, cuotas o gastos de administración, lo destinado a garantía de pensión mínima sino también las sumas adicionales de la aseguradora, por tanto, se adopta en estricto sentido lo decidido por nuestro órgano de cierre en la materia, ordenando a Colfondos S.A., que traslade a Colpensiones, los valores descontados al demandante durante el tiempo de su afiliación en ella, por concepto de aportes para la Garantía de Pensión Mínima, y con cargo a sus propios recursos, sumas adicionales de las aseguradoras, además de las comisiones de administración.

En especial, no operó la prescripción pues la ineficacia no está sometida a dicha figura, por conllevar la inexistencia del acto jurídico sobre el que recae y el reconocimiento pensional se presentó como una de las consecuencias del retorno al RPM administrado por Colpensiones, además esta Sala, acoge la postura pacífica de la H. Corte Suprema de Justicia, respecto a que las acciones judiciales tendientes a comprobar la forma en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles, como es el caso de la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales.

IV. COSTAS

Finalmente, costas en esta instancia a cargo de Protección S.A por haber resultado vencidas en su recurso. Se fija agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para 2022 (1 SMMLV). Lo anterior a tenor de lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso.

V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín el 9 de mayo de 2022, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por la señora ALICIA MARIA HENAO URIBE contra COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A., **adicionándola**, en el sentido en que ésta última AFP:

Trasladará con destino a COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, la **totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros generados durante todo el tiempo en que la demandante ha figurado como afiliada al RAIS, así como los valores descontados a la actora por concepto de aportes para la garantía de pensión mínima, y **con cargo a sus propios recursos**, PROTECCIÓN S.A trasladará **debidamente indexados** a Colpensiones el valor de comisiones de administración y primas de seguros, descontados en el mismo lapso, en que permaneció como afiliada ante ella.

El cumplimiento de lo ordenado será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con PROTECCIÓN S.A.

Se ordena a COLPENSIONES recibir de PROTECCIÓN S.A los valores correspondientes a los conceptos aludidos, y homologar en el régimen de prima media las semanas cotizadas por la actora durante su afiliación en el RAIS.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. se fijan agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente en 2022 (1 SMMLV).

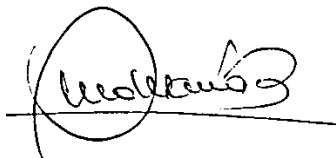
Notifíquese lo decidido por edicto.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN
(En ausencia justificada)